



*Poder Judicial de la Nación*  
“

Juzgado Federal N° 2 – Secretaría N° 2

*Resolución Interlocutoria*

Expte. N°: 1591/2023

NMCM

**INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR en autos: “Colegio Público de Abogados  
1ra. Circ. Corrientes c/ Anses s/ Amparo Ley 16986.-**

///rrientes,01 de Mayo de 2023.-

**Y VISTOS:**

El incidente de medida cautelar formulado en la causa caratulada: “INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR – EN AUTOS “Colegio Público de Abogados 1ra. Circ. Corrientes c/ Anses s/ Amparo Ley 16.986” EXPTE. N° 1591/2023;

**CONSIDERANDO:**

I.- Que a fs. 1/18 se presenta el Dr. José Pedro Cotelo en carácter de Presidente del Colegio de Abogados Primera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, promoviendo formal demanda de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, solicitando como medida cautelar, se ordene a la demandada la suspensión de la circular DP N° 22/23 de fecha 08 de mayo de 2023 y en consecuencia se ordene: 1) permita a los apoderados matriculados y registrados la presentación de trámites previsionales encomendados por su poderdantes sin la presencia física de los futuros beneficiarios; 2) admita la validez de los formularios de Carta poder, iniciación de beneficios y guarda documental en su versión anterior y 3) arbitre los medios informáticos necesarios a fin de que los abogados matriculados puedan sacar turnos para iniciación de cualquier beneficio previsional. En tal sentido, manifiesta que con ello se lesiona de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos no solo del suscripto, sino también de todos los abogados de la jurisdicción del Colegio.

Manifiestan que la circular DP N° 22/23 de fecha 8 de mayo de 2023 requiere la firma de los solicitantes del beneficio (Ley 27705 plan de pago de deuda previsional en el momento de la atención en la UDAI), excluyendo expresamente la posibilidad de los abogados apoderados, se presenten por sí mismos, con la documentación necesaria en nombre y representación de los





*Poder Judicial de la Nación*  
“

clientes, a iniciar el beneficio previsional con aplicación de la ley 27.705 sin necesidad física de los mandantes.

Sostiene que concurren en el caso los presupuestos de procedencia para un pedido cautelar. Fundamenta su pretensión en la verosimilitud del derecho, a través de la documental presentada, como del análisis de los hechos de donde surge la violación de sus derechos constitucionales, produciéndose como consecuencia un daño material irreparable al actor y respecto al peligro en la demora por el temor de frustración del interés jurídico protegido que se traduce en el resguardo de la presentación de los tramites de iniciación de beneficio jubilatorio por la ley Nº 27705 (Plan de Pago de Deuda Previsional) mediante apoderado.

Deduce que no hay falta de afectación del interés público. Ofrece caución para responder por eventuales daños y perjuicios.

**II.-** Corrido traslado previsto en el art. 4 de la Ley Nº 26.854, contesta la Administración Nacional de la Seguridad Social, manifestando en su defensa que no hay causa judicial que merezca intervención, reconoce que la circular interna de trabajo DP Nº 22/23 nunca ha entrado en vigencia y por ende no ha ocasionado perjuicio o daño alguno a los representados de la actora.

Menciona que la actora pretende una atención privilegiada y diferenciada para los abogados, en relación al ciudadano que se puede presentar sin asesoramiento letrado al ser de acceso público y gratuito.

Alega que en el armado de atención, mediante circulares internas, define recaudos y requisitos para acceder a las distintas prestaciones, las que consideran al titular y al apoderado, determinando formas distintas de documentación, que difieren según se presente uno o el otro.

Arguye que el dictado de una medida cautelar afectaría el interés público, al obstaculizar las facultades plenas de organización, impidiendo la toma de decisiones dinámicas y efectivas.

Menciona la inexistencia de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar. Destaca que al referirse la circular Nº 22/23 a la persona solicitante del turno, refiere a las dos modalidades de atención, esto es, del titular o el apoderado, según quien sea la persona que haya realizado la solicitud y en la medida en que el solicitante sea un letrado, deberá acompañar la documentación que acredite su condición y que se encuentra facultado por el titular para gestionar en su nombre.





*Poder Judicial de la Nación*  
“

Señala que presentado el apoderado/abogado en la sede de Anses (UDAI Corrientes), y en la medida en que se acredite la representación con el poder, el mismo gestiona la prestación, sin necesidad que el titular se presente, y procede a firmar los formularios que surgen del sistema SICA y a los cuales hace referencia la circular.

Afirma que no existe ningún impedimento para que el letrado se presente y gestione la prestación incluyendo el plan de regularización de deuda.

**III.-** Que se pasaron los autos a despacho a resolver.

**IV.-** Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señala que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma trascendencia institucional y debe ser considerado como última *ratio legis* (Fallos:285:322; 316:2624; 327:5723). Sin embargo, ello no implica que los jueces tengan la obligación ineludible, de aceptar la vigencia de aquellas normas sometidas a su consideración, que confrontadas con la Constitución Nacional, la contraríen de modo evidente. Particularmente expresado esto en el reducido ámbito de aplicación que implica abordar, con eficacia, y *prima facie*, la adopción de un anticipo jurisdiccional.

**V.-** Que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (“La Ley” 1996-C-434).

En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora.

Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa (“La Ley” 1996-B-732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse (“La Ley” 1999-A-142).





*Poder Judicial de la Nación*

**VI.-** Que en lo concerniente a la verosimilitud del derecho, se destaca que de la documentación agregada y manifestaciones del accionante, se advierte que se trata de determinar si la conducta de la demandada restringiría de manera arbitraria los derechos constitucionales que protegen el ejercicio profesional y en definitiva el derecho de los administrados a contar con patrocinio letrado.

Que prima facie, y en el reducido ámbito que implica adoptar decisiones, el pedido debe ser receptado.

**VII.-** Que la Circular DP n° 22/23 fue dictada por la Administración Nacional de la Seguridad Social en el Marco de la Ley n° 27705 que establece un “Plan de Pago de Deuda Previsional”.

Que la misma dispone de una serie de formularios y/o documentos que deben ser indefectiblemente impresos y firmados individualmente por la persona titular, para luego ser digitalizados y subidos al expediente SIEEL.

Además, hace saber “...que los formularios que genere el sistema SICA y requieran firma por parte de la persona solicitante, deberán ser suscriptos en el momento de la atención en la UDAI, no resultando válidos todos aquellos que no sean emitidos por los sistemas, o que sean firmados y certificados, fuera del ámbito de la UDAI...”

**VIII.-** Que de la circular impugnada se desprende, en el limitado marco cautelar, que solo pueden ser realizadas por la persona titular, vedando la posibilidad de que la firma la realice el apoderado del solicitante.

Que, se advierte configurado, prima facie y dentro del limitado marco cautelar, al menos, una vía de hecho, al impedir la representación legal de los titulares en virtud de la ley N° 27.705 (Plan de Pago de Deuda Previsional).

En este sentido, cuando la Administración Pública quebranta el principio de legalidad y promueve operaciones materiales restrictivas o cercenadoras de los derechos y garantías individuales carentes de aquella base sustentadora, se está en presencia de una “vía de hecho”, situación que genera la ilicitud del obrar administrativo y, consiguientemente, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. (HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Tomo 1, Ed.Astrea, Buenos Aires, 1987 pág 24).

Que al obligarlos a realizar la totalidad del trámite para obtener el beneficio solo con la presencia del titular, se vedaría la posibilidad de acceder al asesoramiento de los profesionales en la materia, que ayudarían a comprender los alcances de los formularios que suscriben.





*Poder Judicial de la Nación*  
“

**IX.-** Que el trámite administrativo ante la ANSES, conforme lo manifestado por la propia demandada puede realizarlo el titular como su abogado apoderado al decir en su contestación del informe del art 4 de la Ley N° 26.854 “...que el apoderado podía solicitar el turno a través de la prestación “jubilación” en forma directa indicando sus datos y el de su representado. Que, en consecuencia, la circular, en su última parte, cuando señala que “los formularios *que genere el sistema SICA y requieran firma por parte de la **persona solicitante**, deberán ser suscritos en el momento de la atención en la UDAI”, refiere, como surge literalmente de la norma al solicitante del turno, el cual como se indica *supra* respecto a las dos modalidades de atención, puede ser el titular o el apoderado, según quién sea la persona que haya realizado la solicitud. Esto, lógicamente, en la medida que el solicitante, en caso que sea un letrado, **acompañe la documentación que acredite su condición de apoderado y que se encuentra facultado por el titular para gestionar en su nombre....”**.*

En atención a ello, la Circular N° 22/23 deberá entenderse en el sentido expresado, esto es, que al iniciar el expediente por Ley N° 27.275 “Plan de Pago de Deuda Previsional”, los formularios/documentos podrán ser firmados por la persona titular y/o su abogado apoderado.

Que el administrado tiene el derecho a hacerse patrocinar y representar por un abogado y que pueda efectuar todos los actos procedimentales que correspondan a la defensa y representación de su cliente.

Que lo dicho, no generaría un desequilibrio respecto del resto de los beneficiarios, puesto que el letrado acompañaría a su representado en la gestión con el turno asignado a este.

Que respecto a lo solicitado por la parte actora, de poder obtener en calidad de apoderado la solicitud por turno, vía web para la adhesión al plan de pago de deuda previsional, para que actúen en representación de sus poderdantes, se decidirá en la sentencia definitiva.

**X.-** Que la imposición de costas, al igual que la regulación de los honorarios profesionales, deberá diferirse hasta contar con la resolución de fondo de la Litis.-

**XI.-** Que por las razones expuestas:

**RESUELVO:**

**1.-** Previa caución juratoria que deberá prestar la peticionante, **HACER LUGAR PARCIALMENTE** a la medida cautelar solicitada





*Poder Judicial de la Nación*  
“

por el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes, y en consecuencia ordenar a la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- Suspenda la aplicación de la Circular N°22/23 de fecha 08/05/2023 en cuanto dispone “... firmados individualmente por la persona titular...” y en su último párrafo “...requieran firma por parte de la persona solicitante...” quedando facultados los abogados apoderados a solicitar la iniciación del trámite y acogimiento al Plan de Deuda Previsional creado por Ley N° 27.275, debiendo contener el instrumento de procura facultades específicas a tal fin, todo ello bajo su responsabilidad; **2-** A fin de notificar lo resuelto en el día de la fecha líbrese Oficio a la demandada (Administración Nacional de Seguridad Social), previa carga al Sistema de Gestión Lex100 para su control y posterior suscripción. **3.-** Hágase saber a la demandada que deberá comunicar en autos el cumplimiento de lo ordenado, bajo apercibimiento de ley. **4.** Proveo con habilitación de días y horas inhábiles. **5.** Regístrese y notifíquese.

**JUAN CARLOS VALLEJOS**

**JUEZ FEDERAL**

